

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**RAMA JUDICIAL
SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**

MAGISTRADA PONENTE: MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTE	ÓSCAR DARÍO BERMÚDEZ CASTRO
DEMANDADO	JIMENEZ BERMÚDEZ OCHOA & CIA S.A.S.
LITISCONSORTE	PORVENIR S.A. y COLPENSIONES
PROCEDENCIA	JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CTO DE MEDELLÍN
RADICADO	05001 31 05 002 2017 00489 01
SEGUNDA INSTANCIA	APELACIÓN DEMANDADA
TEMAS Y SUBTEMAS	- Despido Indirecto – Incumplimiento de obligaciones patronales - Principio de consonancia , deber de razonar los motivos inconformidad respecto del fallo apelado – Ley 2 de 1984 y Art. 66 CPLSS.
DECISIÓN	CONFIRMA

SENTENCIA No.013

Medellín, veintisiete (27) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

En atención a lo previsto en el decreto 806 del 4 de junio de 2020 convertido en legislación permanente a través Ley 2213 de 2022, una vez discutido y aprobado en la SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL el presente asunto, según consta en Acta N°003 de 2023, se procede a dictar **SENTENCIA** en orden a resolver el recurso de apelación presentado por el apoderado judicial de la sociedad **JIMENEZ BERMUDEZ OCHOA & CIA S.A.S.**, respecto de la Sentencia del 3 de noviembre de 2021, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín.

ANTECEDENTES

El señor **ÓSCAR DARÍO BERMÚDEZ CASTRO** presentó demanda ordinaria laboral en contra de la sociedad **JIMENEZ BERMÚDEZ OCHOA & CIA S.A.S.** con el fin de que: **1)** Se declare, la nulidad relativa del contrato de trabajo a término fijo suscrito entre las partes el 19 de abril de 1998, al haberse simulado lo relativo a su duración, para seguido, declarar la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido vigente entre el 18 de abril de 1988 y el 24 de agosto de 2016. **2)** En consecuencia, pidió condenar a la pasiva al pago de los salarios adeudados por el periodo del 7 al 24 de agosto de 2016, así como al reajuste de las prestaciones sociales y vacaciones, liquidadas con base en el salario realmente devengado durante la vigencia del vínculo. **3)** Que, en razón del despido indirecto del que fue objeto, sea condenada la sociedad accionada al pago de la indemnización por despido injusto, al igual que por los perjuicios morales generados a raíz de la

desvinculación. 4) Que se ordene el pago de los aportes a pensión dejados de cancelar, con los respectivos intereses moratorios, estos con destino a la AFP PORVENIR S.A. 5) Así mismo, petición el pago de la indemnización moratoria reglada en el artículo 65 CST, la sanción por el pago deficitario de las cesantías fundamentada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y los intereses moratorios o la indexación de las condenas que sean susceptibles de estos.

Sustentó sus pretensiones en que, laboró para la sociedad **JIMENEZ BERMUDEZ OCHOA Y CIA S.A.S.** mediante contrato de trabajo a término indefinido desde el 18 de abril de 1988, empleo en el cual ocupó los cargos de ayudante de panadería, vendedor, hornero, operario de multiформadora y supervisor, labores desplegadas en las sedes de los barrios Popular No. 1, el Playón de los Comuneros y San Diego, todos de Medellín, precisando que, durante los primeros cinco (5) años devengó el salario mínimo, y posterior a ello su asignación mensual siempre fue superior a dicha suma, pagadero semanalmente. Así mismo, expuso que en su labor tenía como jefe inmediato al señor Antonio José Jiménez Bermúdez.

Frente a este último punto explicó que, desde el momento que comenzó a recibir sumas por encima del mínimo, la empresa le hacía firmar 2 recibos de pago, uno donde se precisaba el salario básico, y otro en el cual se estipulaba el pago de las horas extras. Que años después, el 19 de abril de 1998, la demandada, sin previo acuerdo o negociación, lo requirió para que firmara contrato de trabajo a término fijo, pese a que nunca hubo intención de las partes en modificar la duración del vínculo, pues no hubo retiro del sistema de seguridad social, modificación de funciones, jornada de trabajo, horario laboral o periodos de pago.

Que, entre el 18 de abril y el 19 de diciembre de 1988 la empresa no efectuó los aportes en materia de pensiones, e igualmente, durante el tiempo en que sí realizó tales cotizaciones, no tuvo en cuenta los salarios realmente devengados. Indicó que su jornada laboral estaba comprendida de lunes a sábado y, ocasionalmente trabajaba domingos y festivos, normalmente con un horario de 6:00 am a 8:00 pm, con 15 minutos para desayunar y 30 para tomar el almuerzo. A continuación, refirió que, su empleadora nunca le pagó las prestaciones sociales y vacaciones con base en el salario realmente devengado, como quiera que siempre canceló estas acreencias teniendo en cuenta el valor del salario mínimo.

Manifestó que, al hallar irregularidades, el INVIMA selló las instalaciones de la demandada el 6 de agosto de 2016, por lo que el gerente de la accionada le indicó que se fuera a su casa a esperar el llamado para volver a prestar el servicio; sin embargo afirmó que, el 24 de agosto de 2016 presentó renuncia al empleo por causas imputables a la empresa, esbozando como motivo de esta decisión, los malos tratos del gerente, actos que informó, le causaron trastornos mentales (depresión severa y trastorno de control de impulsos), sumado a la falta de pago oportuno de los aportes al sistema de seguridad social integral, lo cual generaba retardos en la atención en salud o la falta de suministro de medicamentos para el tratamiento de sus enfermedades, añadiendo que también tomaba esta determinación por el descuento efectuado del salario por los productos dañados durante el proceso de horneado, la falta de pago de la prima del primer semestre de 2016, las cesantías y los intereses a las cesantías de 2015, al igual que el salario causado después del sellamiento de la sede donde laboraba.

Que la mora de la empresa en el pago de aportes se revela en el reporte histórico respectivo, en el cual se observa que, por ejemplo, los aportes de octubre y noviembre de 2015 fueron cancelados en diciembre de ese año, mientras que el ciclo de este último mes solo fue cancelado en junio de 2016, mientras que para los primeros meses de 2016 su cancelación se dio en mayo de esa misma anualidad. Aseveró que debió soportar un ambiente pesado al interior de la empresa, debido a los

malos tratos del jefe inmediato, debiendo estar en tratamiento psicológico y psiquiátrico, conforme se evidencia de su historia clínica, situación que pese a ser conocida por la empresa, no efectuó actuación alguna para evitar que continuaran sucediendo.

Por último, expresó que, presentó petición a la demandada solicitando información relevante en relación con su contrato de trabajo, frente a la cual recibió respuesta parcial el 24 de noviembre de 2016 (f. 3 a 15 Archivo 01 ED).

Mediante Auto del 21 de septiembre de 2017 el Juzgado de primer grado admitió la demanda, disponiendo la vinculación al proceso de **PORVENIR S.A.** (f. 152 a 153 Archivo 01 ED).

POSICIÓN DE LA ACCIONADA y VINCULADAS

En el momento procesal oportuno, la sociedad **JIMENEZ BERMUDEZ OCHOA & CIA S.A.S.** se opuso a lo solicitado en la demanda, tras alegar, primero, que, si bien hubo tardanzas en el pago de algunas obligaciones, tales retardos tuvieron como fundamento las dificultades económicas afrontadas por la empresa, por lo cual no puede considerarse que actuó de mala fe, y mucho menos la configuración de una justa causa para dar por terminado el contrato por razones imputables a la empresa. En segundo lugar, expuso, frente al despido anunciado, que la empresa adoptó una postura paternal frente al trabajador, a pesar de las múltiples falencias e infracciones presentadas por aquel. Con base en ello, formuló como excepciones las de “(...) *PRESCRIPCIÓN; BUENA FE; COMPENSACIÓN e INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN* (...)” (f. 155 a 164 Archivo 01 ED).

A su turno, la AFP **PORVENIR S.A.** propuso como excepciones las denominadas “(...) *HECHO EXCLUSIVO DE UN TERCERO y BUENA FE* (...)” (f. 249 a 265 Archivo 01 ED).

Mediante providencia dictada en audiencia del 4 de marzo de 2019 el *A quo* dispuso vincular al trámite a **COLPENSIONES**, entidad que formuló en su defensa los exceptivos de “(...) *INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE COLPENSIONES DE RECIBIR APORTES A SEGURIDAD SOCIAL RETROACTIVAMENTE HASTA TANTO SE ACREDITE JUDICIALMENTE LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN LABORAL Y SE CANCELEN LOS RESPECTIVOS INTERESES MORATORIOS EN FAVOR DE LA ENTIDAD, PRESCRIPCIÓN, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS y BUENA FE* (...)” (f. 377 a 383 Archivo 01 ED).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Surtido el trámite de primera instancia, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, mediante Sentencia del 3 de noviembre de 2021, decidió:

“(...) PRIMERO: Se declara que entre el señor Oscar Darío Bermúdez Castro y la sociedad Jiménez Bermúdez Ochoa y Cia S.A.S existió un contrato de trabajo desde el 19 de abril de 1988 hasta el 24 de agosto de 2016, sin solución de continuidad.

SEGUNDO: Se declara que el señor Oscar Darío Bermúdez Castro renunció por causas imputables al empleador, lo que constituyó un despido indirecto.

TERCERO: Se declara que el pago de los aportes a la seguridad social y el pago definitivo de prestaciones sociales y vacaciones fue deficitario, conforme lo expuesto en las consideraciones.

CUARTO: Se condena a la sociedad Jiménez Bermúdez Ochoa y Cia S.A.S, con NIT 890.934.961-0 al pago de los siguientes conceptos, conforme lo expuesto en las consideraciones:

Indemnización por despido sin justa causa		\$13.373.966																																																																							
Pago del 100% del reajuste de los aportes a pensiones, durante el periodo correspondiente al 19 de abril de 1988 hasta el 19 de diciembre de 1988., a COLPENSIONES, con un IBC del salario mínimo legal mensual vigente para la época, esto es, la suma de \$25.637, conforme el cálculo actuarial que haga la entidad para tal efecto, con los respectivos intereses de mora y en el término establecido por la entidad, que no deberá superar los dos meses después de la ejecutoria de la presente sentencia.																																																																									
Igualmente se condena al demandado, a realizar el 100% del reajuste correspondiente a los aportes a pensiones a PORVENIR, durante el término comprendido desde el 1 de enero de 2014 al 24 de agosto de 2016 conforme el cálculo actuarial que haga la entidad para tal efecto, con los respectivos intereses de mora y en el término establecido por la entidad, que no deberá superar los dos meses después de la ejecutoria de la presente sentencia y con base en el siguiente IBC																																																																									
<table><tr><th>2014</th><th>Salario</th></tr><tr><td>Enero</td><td>\$1.152.352</td></tr><tr><td>Febrero</td><td>\$1.892.888</td></tr><tr><td>Marzo</td><td>\$1.305.582</td></tr><tr><td>Abril</td><td>\$1.558.626</td></tr><tr><td>Mayo</td><td>\$1.783.613</td></tr><tr><td>Junio</td><td>\$1.463.674</td></tr><tr><td>Julio</td><td>\$1.711.901</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>\$1.506.879</td></tr><tr><td>Septiembre</td><td>\$1.756.144</td></tr><tr><td>Octubre</td><td>\$1.465.780</td></tr><tr><td>Noviembre</td><td>\$1.503.695</td></tr><tr><td>Diciembre</td><td>\$1.447.232</td></tr></table>	2014	Salario	Enero	\$1.152.352	Febrero	\$1.892.888	Marzo	\$1.305.582	Abril	\$1.558.626	Mayo	\$1.783.613	Junio	\$1.463.674	Julio	\$1.711.901	Agosto	\$1.506.879	Septiembre	\$1.756.144	Octubre	\$1.465.780	Noviembre	\$1.503.695	Diciembre	\$1.447.232	<table><tr><th>2015</th><th>Salario</th></tr><tr><td>Enero</td><td>\$1.662.497</td></tr><tr><td>Febrero</td><td>\$1.398.008</td></tr><tr><td>Marzo</td><td>\$1.930.121</td></tr><tr><td>Abril</td><td>\$1.728.640</td></tr><tr><td>Mayo</td><td>\$1.714.273</td></tr><tr><td>Junio</td><td>\$1.540.356</td></tr><tr><td>Julio</td><td>\$1.649.354</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>\$2.331.777</td></tr><tr><td>Septiembre</td><td>\$1.715.069</td></tr><tr><td>Octubre</td><td>\$1.759.747</td></tr><tr><td>Noviembre</td><td>\$2.142.522</td></tr><tr><td>Diciembre</td><td>\$1.471.018</td></tr></table>	2015	Salario	Enero	\$1.662.497	Febrero	\$1.398.008	Marzo	\$1.930.121	Abril	\$1.728.640	Mayo	\$1.714.273	Junio	\$1.540.356	Julio	\$1.649.354	Agosto	\$2.331.777	Septiembre	\$1.715.069	Octubre	\$1.759.747	Noviembre	\$2.142.522	Diciembre	\$1.471.018	<table><tr><th>2016</th><th>Salario</th></tr><tr><td>Enero</td><td>\$1.832.667</td></tr><tr><td>Febrero</td><td>\$1.224.069</td></tr><tr><td>Marzo</td><td>\$1.685.080</td></tr><tr><td>Abril</td><td>\$1.640.052</td></tr><tr><td>Mayo</td><td>\$2.213.546</td></tr><tr><td>Junio</td><td>\$1.584.883</td></tr><tr><td>Julio</td><td>\$974.896</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>\$689.455</td></tr></table>	2016	Salario	Enero	\$1.832.667	Febrero	\$1.224.069	Marzo	\$1.685.080	Abril	\$1.640.052	Mayo	\$2.213.546	Junio	\$1.584.883	Julio	\$974.896	Agosto	\$689.455	
2014	Salario																																																																								
Enero	\$1.152.352																																																																								
Febrero	\$1.892.888																																																																								
Marzo	\$1.305.582																																																																								
Abril	\$1.558.626																																																																								
Mayo	\$1.783.613																																																																								
Junio	\$1.463.674																																																																								
Julio	\$1.711.901																																																																								
Agosto	\$1.506.879																																																																								
Septiembre	\$1.756.144																																																																								
Octubre	\$1.465.780																																																																								
Noviembre	\$1.503.695																																																																								
Diciembre	\$1.447.232																																																																								
2015	Salario																																																																								
Enero	\$1.662.497																																																																								
Febrero	\$1.398.008																																																																								
Marzo	\$1.930.121																																																																								
Abril	\$1.728.640																																																																								
Mayo	\$1.714.273																																																																								
Junio	\$1.540.356																																																																								
Julio	\$1.649.354																																																																								
Agosto	\$2.331.777																																																																								
Septiembre	\$1.715.069																																																																								
Octubre	\$1.759.747																																																																								
Noviembre	\$2.142.522																																																																								
Diciembre	\$1.471.018																																																																								
2016	Salario																																																																								
Enero	\$1.832.667																																																																								
Febrero	\$1.224.069																																																																								
Marzo	\$1.685.080																																																																								
Abril	\$1.640.052																																																																								
Mayo	\$2.213.546																																																																								
Junio	\$1.584.883																																																																								
Julio	\$974.896																																																																								
Agosto	\$689.455																																																																								
Reajuste de prestaciones sociales y vacaciones al término de la relación laboral		\$2.523.949																																																																							
Indemnización moratoria del art. 65 del CST		\$41.150.880. A su vez, y como quiera que a la fecha de terminación del contrato, el empleador quedó adeudando la suma de \$2.523.949 por concepto de reajuste de prestaciones sociales, deberá cancelar intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia financiera sobre dicha suma y hasta el momento en que realice el pago																																																																							

***QUINTO:** Se ordena el pago indexado de la indemnización por despido sin justa causa. (...)*”.

RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado judicial de la demandada **JIMÉNEZ BERMÚDEZ OCHOA & CIA S.A.S.** presentó recurso de apelación en contra de la decisión anterior, solicitando su revocatoria parcial en torno de la indemnización por despido injusto, el pago de aportes a seguridad social en pensión, el reajuste de las prestaciones, la indemnización moratoria y las costas procesales. Preciso que, a su juicio, no quedó demostrado en el proceso que el despido tuviera relación directa con los dineros que supuestamente le adeudaba la empresa al demandante, conforme quedó precisado en los alegatos de conclusión.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término otorgado, **COLPENSIONES** recordó la regulación legal en torno a la obligatoriedad de los aportes para pensión en cabeza del empleador, conforme el Decreto 3041 de 1966 y la Ley 100 de 1993, así como la posición jurisprudencial al respecto (Sentencias Rad. 34270 del 22 de julio de 2008, SL9856-2014, SL4539-2018, SL3399-2018 y SL2179-2019), a partir de lo cual manifestó que, pese a lo anterior, se configura una falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que las pretensiones no están formuladas en contra de esta entidad (Archivo 05 ED).

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico que ocupa la atención de la Sala gravita en establecer, primero, si de las pruebas practicadas es posible establecer si estaban dados los presupuestos para condenar a la sociedad **JIMÉNEZ BERMÚDEZ OCHOA & CIA S.A.S.** al reconocimiento y pago de indemnización por despido injusto, derivada del despido indirecto. Así mismo, verificará la Sala la viabilidad de estudiar las demás condenas impuestas a la pasiva, de acuerdo con los reparos planteados por la parte accionada.

CONSIDERACIONES

Sea lo primero reseñar que en atención a lo normado en el artículo 66A CPT y SS la decisión de esta instancia se circunscribe a los asuntos materia del recurso de apelación, restricción a la competencia funcional del fallador de segundo grado, que impone el deber de decidir estrictamente dentro del marco fijado en la alzada (SL 2808-2018), con la salvedad hecha para los derechos laborales mínimos e irrenunciables del trabajador (SL8613-2017 y SL12869-2017), según lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-968 de 2003.

A esta altura no se discuten los siguientes supuestos facticos:

- Que el señor **ÓSCAR DARÍO BERMÚDEZ CASTRO** fue vinculado al servicio de la sociedad **JIMÉNEZ BERMÚDEZ OCHOA & CIA S.A.S.**, a partir del 18 de abril de 1988 (f. 178 a 179 Archivo 01 ED).

- Que la relación en comento culminó por decisión unilateral del trabajador el 24 de agosto de 2016 (f. 80 y 149 a 151 Archivo 01 ED).

DEL DESPIDO INDIRECTO

Precisados entonces los supuestos indiscutidos en el particular, frente al tópico de la desvinculación, la parte actora esbozó desde la demanda que su decisión de renunciar a la empresa estuvo motivada en aspectos atribuibles a la sociedad **JIMENEZ BERMÚDEZ OCHOA & CIA S.A.S.**, como eran, de un lado, el trato degradante recibido del gerente de la sociedad, y de otro las deducciones por pérdida de materia prima, acreencias dejadas de cancelar y la falta de pago de los aportes a salud, situación esta última que le impidió acceder a los servicios médicos requeridos para el tratamiento de las patologías que lo aquejan, cuestiones ambas que el Juzgador de primer grado encontró acreditadas, por lo que le impuso a la pasiva la obligación de cancelar en favor del demandante la indemnización por despido respectiva.

A lo expuesto se opuso el extremo encartado, arguyendo en la apelación, que no está probado que la renuncia presentada por el trabajador tuviere relación directa con los dineros adeudados por la empresa.

Para resolver la discusión propuesta, de entrada, anota la Sala que, aun cuando saliera adelante el alegato presentado por la parte, no habría lugar a revocar la decisión en torno al despido y la consecuencial indemnización, en razón a los argumentos que pasan a exponerse.

Así se considera en tanto que, dentro de su análisis, el Juez de primer grado encontró acreditada la configuración de las causales contenidas en los numerales 2°, 6° y 8° del Literal B del artículo 62 CST, que son del siguiente tenor:

“(…) 2. Todo acto de violencia, malos tratamientos o amenazas graves inferidas por el {empleador} contra el trabajador o los miembros de su familia, dentro o fuera del servicio, o inferidas dentro del servicio por los parientes, representantes o dependientes del {empleador} con el consentimiento o la tolerancia de éste.

(…)

6. El incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte del {empleador}, de sus obligaciones convencionales o legales.

(…)

8. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones que incumben al empleador, de acuerdo con los artículos 57 y 59 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos. (…).”

De ahí que, al contrastar lo concluido en la Sentencia apelada con los argumentos de inconformidad planteados por la parte recurrente, se observa sin dificultad que, el promotor de la alzada planteó la inexistencia de prueba en dirección a que la desvinculación del demandante, entiende la Sala, se produjo en razón de los incumplimientos sistemáticos en el aspecto económico a cargo del patrono.

En ese sentido, y pese a que como quedó visto, con lo argüido la parte solo formula ataque en contra de la segunda causal enunciada, a fin de dar solución a su planteamiento, se abordará el estudio con el objetivo de corroborar lo señalado en el recurso, toda vez que la Corporación está supeditada, por consonancia, a los señalamientos efectuados en la formulación de la alzada, según lo ha recordado la Jurisprudencia Laboral, por ejemplo, en la Sentencia

SL4805-2020: “(...) *ad quem está atado a los precisos términos que el recurrente proponga en la apelación, lo cual le impide decidir sobre otros, que sean accesorios a la condena o inherentes a ella pero que no hayan sido explícitamente reclamados ni sustentados en el recurso (...)*”.

Esgrimido lo anterior, se tiene que, respecto a la causal en comento (Numeral 6° Literal B Artículo 62 CST), la pacífica Jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, reiterada, a guisa de ejemplo, en sentencia SL1514-2018 del 3 de mayo de 2018, ha señalado que cuando es el trabajador quien finaliza el nexo causal con fundamento en el incumplimiento de las obligaciones del empleador, **es a este a quien le atañe demostrar ante la autoridad laboral la ocurrencia de los hechos que motivaron la finalización del vínculo, y si los acredita, es el empleador quien debe asumir las consecuencias pertinentes, empero si no se logra probar el incumplimiento enrostrado, necesariamente la conclusión será que la terminación del contrato de trabajo obedeció a una decisión libre y espontánea del trabajador.**

A folios 149 a 151 Archivo 01 ED obra misiva de fecha 24 de agosto de 2016, en la cual el demandante comunicó a la empresa accionada su renuncia al cargo de “hornero” efectiva a partir de la calenda en comento. Sobre las razones de la renuncia el señor **BERMÚDEZ CASTRO**, indicó:

“(...) A pesar de que he prestado servicios para esta empresa por más de 28 años y de que mi desempeño y disposición hacía el trabajo siempre han sido los mejores, durante los últimos 5 años he recibido constantemente malos tratamientos por parte del señor Antonio José Jiménez Bermúdez, gerente general de la empresa, a través de expresiones verbales injuriosas y ultrajantes, situación que se agravó e intensificó en los últimos días.

El señor Jiménez Bermúdez, en reiteradas ocasiones, me ha manifestado que soy "objetivo militar de la compañía" y que "me va hacer aburrir". Además de lo anterior afirma, delante de mis compañeros de trabajo; que soy: "enchimbado", "agüevado" y que estoy "enyerbado". Incluso en varias ocasiones, con gestos provocadores, me ha retado para iniciar un enfrentamiento físico.

Como consecuencia del pesado ambiente laboral que he tenido que vivir y soportar en la empresa y de los malos tratamientos que recibo por parte del señor José Jiménez Bermúdez, he sido diagnosticado con una depresión severa y trastorno de control de impulsos que tiene como síntomas: pensamientos e intentos suicidas, pensamientos homicidas, cambio de humor, entre otros. En la actualidad, por los mencionados padecimientos de salud, estoy en tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Para agravar mi situación la empresa se encuentra en mora de pagar los aportes al Sistema Integral de la Seguridad Social en salud, riesgos laborales y pensiones y en el pago de aportes parafiscales. Lo anterior a pesar de que descuento de mis salarios los porcentajes correspondientes para realizar los mencionados aportes. Como consecuencia de ese actuar negligente y descuidado de mi empleador la EPS a la que me encuentro afiliado me negó entre el mes de enero y el mes de junio del presente año el suministro de los medicamentos que me diagnosticaron para tratar las enfermedades psicológicas y psiquiátricas que padezco, específicamente de la mirtazapina y biopropio.

(...)

Además de lo narrado anteriormente la empresa se encuentra en mora en el pago de las prestaciones sociales: no me han pagado la prima del primer semestre del presente año, tampoco me pagaron los intereses a las cesantías en enero y mucho menos consignaron las cesantías en un fondo, como lo establece la ley. Ni siquiera me las pagaron directamente.

(...)

También presento renuncia motivada porque la empresa de manera unilateral y sin contar con mi autorización, me viene descontando de mis salarios, de manera sistemática contra prohibición expresa del Código Sustantivo del Trabajo, el valor de los productos que se dañan durante el proceso de horneado, lo que ha sucedido en varias ocasiones. (...) (Subraya y Negrilla de la Sala).

Del documento evocado se extrae que fueron dos (2) las razones esbozadas por el demandante que al parecer motivaron su renuncia. La primera, concerniente al trato desobligante e inapropiado recibido del gerente de la empresa, señor Antonio José Jiménez Bermúdez, y la segunda, punto que interesa de cara a lo propuesto en el recurso, tiene que ver con la mora de la empresa en cancelar los aportes a seguridad social integral, pese a que de su salario le efectuaron los descuentos pertinentes, habiéndole generado esto, una barrera para el acceso a los servicios de salud y entrega de medicamentos entre enero y junio de 2016, prescritos para tratar las patologías padecidas por aquel, situación que se ha hecho extensiva a sus hijos.

De igual forma, puso de presente que para esa calenda le era adeudada la prima del primer semestre de ese año, los intereses a las cesantías y la consignación de las cesantías, añadiendo que pese a haber sido enviado a su casa desde el 6 de agosto de 2016, a raíz del cierre ordenado por el INVIMA, no le fueron pagados los salarios respectivos, al paso que le hacían deducciones

Sobre estas circunstancias, en interrogatorio de parte rendido por el demandante, señor **ÓSCAR DARÍO BERMÚDEZ CASTRO** (Min. 09:10 a 37:27 Archivo 23 ED), aquel reiteró que, en materia de aportes a seguridad social, la empresa no pagó varios ciclos, lo que significó que la EPS no le entregara los medicamentos que le eran prescritos para tratar sus patologías, aunado a que la demandada tampoco efectuó gestión alguna con miras a proveer tales fármacos. Luego, expuso que las prestaciones le fueron canceladas con base en el salario realmente devengado, y que la renuncia presentada obedeció a los malos tratos que le eran prodigados por el gerente de la empresa y el incumplimiento de los aportes a seguridad social.

A su turno, el representante de la sociedad accionada, señor **ANTONIO JOSÉ JIMÉNEZ BERMÚDEZ** (Min. 09:10 a 1:00:44 Archivo 23 ED), aceptó que la empresa tuvo retrasos en el pago de la seguridad social de sus trabajadores, pero se pusieron al día cuando pudieron; no obstante, explicó que, ante su diagnóstico clínico, la empresa le compraba los medicamentos que requería. Sobre la prima de 2016 anotó creer que, si le fue cancelada, mientras que, respecto de las cesantías, dijo que le habían sido consignadas, no recordando lo relativo a los intereses a las cesantías reclamados.

Así mismo, fueron recepcionados los testimonios de **HEBERT ANTONIO BERMÚDEZ CASTRO** (Min. 1:02:54 a 1:20:37 Archivo 23 ED), **NELSON DE JESÚS SEPÚLVEDA** (Min. 1:22:59 a 1:39:17 Archivo 23 ED), **JAIME DE JESÚS SEPÚLVEDA RIVERA** (Min. 1:41:13 a 2:01:32 Archivo 23 ED), **LUZ ELENA GONZALEZ** (Min. 2:03:34 a 2:17:50 Archivo 23 ED) **JUDITH ANDREA JIMÉNEZ OCHOA** (Min. 2:19:38 a 2:38:30 Archivo 23 ED), los cuales laboraron al servicio de la empresa demandada en distintos periodos, manteniendo vinculación vigente solo las dos (2) últimas declarantes.

No obstante, en punto de la temática estudiada en esta sede, la mayoría de los deponentes no refieren dato alguno en relación con la falta de pago de prestaciones, deducciones indebidas o mora en el pago de aportes a seguridad social en nombre del demandante, con excepción de la testigo **JUDITH ANDREA JIMENEZ OCHOA**, Directora Administrativa de la empresa demandada, quien, adentrada en su declaración, expuso que, pese a las dificultades de la sociedad en el año 2016, al trabajador se le pagaba todo. En ese sentido, anotó que, a pesar de la crisis enunciada, que fue la causa de atrasos en ciertos pagos, por lo cual la EPS no le cubría ciertos medicamentos requeridos por el actor, la empresa buscaba la forma de ofrecérselos. Que, al momento en que la sociedad fue intervenida por el INVIMA, se envió a los trabajadores a vacaciones, otros decidieron renunciar, y los demás mantuvieron sus labores en aseo o mantenimiento.

En contraste con ello, del cúmulo de pruebas documentales, emerge, puntualmente la vertida folios 60, 74 y 220 Archivo 01 ED, de la que se constata la cancelación de las cesantías e intereses a las cesantías de 2015, situación que, sumada a las manifestaciones de la parte actora en su interrogatorio, direccionadas a aceptar el pago de las distintas acreencias causadas en su favor, liquidadas con base en la totalidad del salario devengado, precisando incluso que el detonante para su renuncia, a la par de los malos tratos recibidos, fue la mora en el pago de los aportes a seguridad social, no permite colegir, al igual que lo concluyó el Juez de instancia, que hubiere sido el aducido impago de las prestaciones, prolongado en los términos anotados, el que tuviese la entidad para forjar el finiquito contractual por el trabajador.

Luego en lo correspondiente a los aportes a seguridad social (salud y pensión), para la Sala, la conclusión del *A quo* no se ofrece caprichosa, en la medida en que, su reflexión está sustentada en la documental de folios 33 a 40 Archivo 01 ED, contentiva de la relación de aportes a salud expedida por la EPS CAFESALUD, la cual muestra que la empleadora estuvo en mora de cancelar los aportes de enero, febrero y marzo de 2016, en tanto solo fueron pagados s en mayo y junio del mismo año, es decir, tiempo en el que, como lo refirió el demandante, corroborado por el representante de la entidad, señor **ANTONIO JOSÉ JIMÉNEZ BERMÚDEZ**, al igual que la testigo **JUDITH ANDREA JIMENEZ OCHOA**, se presentaron inconvenientes a la hora de recibir la atención en salud, al punto de negársele la entrega de medicamentos para el tratamiento de las patologías mentales que padece (f. 84 a 148 Archivo 01 ED), circunstancia en la que, pese a que la empresa asegura que hizo lo posible por proveer al trabajador de las medicinas requeridas, no hay prueba en el expediente que así lo compruebe.

Y es que, tal anomalía no se presentó solo en relación con los aportes en salud, pues al revisar el histórico de aportes a pensión efectuados ante **PORVENIR S.A.**, entidad en la que se encuentra afiliado el demandante (f. 269 a 281 Archivo 01 ED), se advierte que, para los periodos de diciembre de 2015 a marzo de 2016, las cotizaciones respectivas únicamente se cancelaron por la empresa durante mayo y junio de 2016.

Así, los sucesos expuestas validan la tesis de la parte demandante, y de paso, lo decidido por el Juez de primera instancia que despachó favorablemente esta pretensión, pues emerge con claridad que el remate contractual obedeció, además de los malos tratos recibidos por el accionante de parte de quien fuera el gerente de la sociedad, punto que no fue materia de discusión, al incumplimiento de las obligaciones contractuales (patronales), en punto a la falta de oportunidad en la cancelación de los aportes a seguridad social a nombre del demandante, actitud que según se anotó en precedencia, tuvo incidencia negativa, principalmente, en el tema de la atención en salud del accionante y el suministro de medicamentos.

Ahora, cumple anotar que, si bien con posterioridad, y días antes de la renuncia del trabajador, el empleador se puso al día con los aportes adeudados, lo cierto es que, en este específico caso, la falta de reclamación por parte del trabajador no hace decaer su pretensión por omisión en punto a la inmediatez, y mucho menos supone una aceptación a la actitud del empleador, tal como lo ha decantado la Sala de Casación Laboral de la CSJ en Sentencia SL014-2020 en donde recordó lo señalado en Sentencia SL11253-2015 en la cual dijo: “(...) no incurrió en yerro fáctico evidente el ad quem al no deducir de tal situación la falta de inmediatez, pues en ningún momento puede predicarse que su paciencia se debió a que hubiere consentido o condonado el mal trato recibido, sino que lo hizo porque no tenía otra alternativa más a la de seguir laborando para la empresa, por su condición de asalariado. (...)”.

Es por lo anterior que se impone la confirmación de la sentencia en este aspecto.

De otro lado se advierte que, dentro del recurso, el apoderado judicial de la parte actora también apuntó a la revocatoria de la reliquidación de las prestaciones, de la indemnización moratoria, el pago de aportes de 1988 y el reajuste de las cotizaciones causadas entre 2014 y 2016 ordenados en sentencia de primer grado (Archivo 20AudienciaJuzgamiento minuto 28 ED Cuaderno Primera Instancia); no obstante, frente a estas condenas la parte interesada no expuso reparo alguno, no obstante que ese era su deber, conforme lo impone el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, pues no es suficiente pregonar la existencia de inconformidad, sino que, necesariamente deben identificarse y explicarse, de manera sucinta y sin mayor exigencia, aquellos aspectos frente a los cuales presenta disenso y que pretende sean modificados, adicionados o revocados, para que, en virtud de lo prescrito por el artículo 66 CPLSS, el Superior del Juez cognoscente proceda a pronunciarse sobre estos puntos específicos.

En esos términos lo ha enseñado la Sala de Casación Laboral de la CSJ, por citar un ejemplo, la Sentencia SL1526-2019 que hizo cita de la SL14059-2016:

“(…) Pues bien, en materia laboral el trámite para la sustentación del recurso de apelación sigue siendo el consagrado en el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, que impone a quien apela la carga de sustentar el recurso, respecto de todos aquellos aspectos que aspira de la sentencia impugnada le sean modificados, adicionados o revocados, debiendo señalar las resoluciones de la decisión con las que se encuentre inconforme, es decir que, tiene la obligación procesal de manifestar las razones de su discordia frente al fallo, pues, de lo contrario, se entiende que la parte se encuentra conforme con los puntos definidos por el a quo, careciendo de competencia el superior para examinarlos. Sin embargo, es del caso recordar que este requisito de la debida sustentación del recurso de apelación, no comporta para quien recurre en la alzada la consagración de la exigencia de emplear fórmulas sacramentales, formalidades determinadas o una sustentación especial. Lo que significa, que si bien resulta conveniente identificar y plantear en el escrito de apelación de la mejor forma posible la discrepancia con relación a cada derecho objeto de discordia, mientras lo esbozado se acomode a la naturaleza de este recurso y a la esencia de lo controvertido, no puede el fallador de segundo grado como lo sugiere la censura, abstenerse de estudiar la totalidad de la apelación aduciendo una supuesta ausencia de fundamentación o inadmisibilidad del recurso, pues en las condiciones antedichas se cumpliría cabalmente con el requisito de la sustentación. Eso sí, el Juez Colegiado en su estudio debe ceñirse estrictamente a los temas que proponga el recurrente en el escrito de apelación, para dar igualmente acatamiento al principio de consonancia de que trata el artículo 66A del C.P.T. y S.S., adicionado al estatuto procesal laboral por el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, que preceptúa «La sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación», motivo por el cual le está vedado a dicho Juzgador pronunciarse sobre puntos ajenos o extraños a lo planteado por el impugnante, ya que ello comportaría un claro desconocimiento al debido proceso de la contraparte y una directa vulneración de las referidas disposiciones (...).”

En el asunto de autos la parte accionada se limitó a hacer una relación de los derechos reconocidos frente a los cuales manifestaba su oposición, sin dar razón válida sobre el motivo de inconformidad, el origen de su discrepancia, citando esta a las razones del accionante para aducir el despido indirecto, relativas a los incumplimientos en el pago de aportes a seguridad social, aspecto que no tenía relación con las condenas a las que se estaba oponiendo, con la salvedad hecha respecto del despido indirecto, que fue el asunto analizado en esta instancia. Por tanto, al carecer de sustentación la alzada en torno a las condenas fulminadas, distintas al despido sin justa causa, ello impide a la Sala emitir pronunciamiento alguno, manteniéndose incólume lo decidido en primera instancia frente a estas.

En consecuencia, habrá de confirmarse la decisión de primer grado. Las costas de esta instancia están a cargo de la parte demandada por haberse despachado negativamente su recurso, incluyendo como agencias en derecho la suma equivalente UN (1) SMLMV.

Sin que sean necesarias más consideraciones, la **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,


RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia del 3 de noviembre de 2021 proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín.

SEGUNDO: Las **COSTAS** en esta instancia están a cargo de la sociedad **JIMENEZ BERMÚDEZ OCHOA & CIA S.A.S.**, incluyendo como agencias en derecho la suma equivalente UN (1) SMLMV.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,


MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA